



*Dr. Felipe Marañón Lazcano*

Doctorado en Filosofía con orientación en Ciencia Política, por la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UANL. Licenciatura en Mercadotecnia y Maestría en Ciencias con especialidad en Comunicación, por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Profesor titular de tiempo completo e investigador SNI nivel candidato. Investigador asociado del Laboratorio de Comunicación Política y Coordinador de la Maestría en Ciencia Política. Líneas de investigación: Mercadotecnia y publicidad política, Comunicación política y Generación de estereotipos.



*Dr. David Fernando Lozano Treviño*

Doctorado en Filosofía con especialidad en Administración, por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública.



La investigación aquí planteada busca medir la percepción que los habitantes de la ciudad de Monterrey tienen en temas como: desarrollo sustentable, servicio en la administración pública, educación, democracia, corrupción y comunicación política. Dicho estudio constituye el pilar fundamental en la ruta de investigación para identificar el estatus que guarda el vínculo de la sociedad y las instituciones de gobierno, buscando con ello identificar y generar propuestas de acción en favor de un desarrollo comunitario.



fontamara

Xóchitl A. Arango Morales, et al.

CULTURA DE LA LEGALIDAD CIUDADANA

# CULTURA DE LA LEGALIDAD CIUDADANA

## Análisis sobre el caso de Monterrey

**Xóchitl A. Arango Morales, Oswaldo Leyva Cordero  
Felipe Marañón Lazcano, David F. Lozano Treviño  
(Coordinadores)**



*Dra. Xóchitl A. Arango Morales*

Doctorado en Filosofía con acentuación en Ciencia Política, por la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Docente de tiempo completo en la misma Facultad. Maestría en Políticas Públicas. Reconocida con el Perfil PROMEP. Validadora de reactivos del CENEVAL. Línea de investigación: Ética pública, Ética legislativa.



*Dr. Oswaldo Leyva Cordero*

Doctor en Gerencia y Política Educativa por el Centro de Estudios Universitarios de Baja California. Doctorante en Filosofía con acentuación en Ciencias Políticas, por la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Docente de tiempo completo en la misma Facultad. Reconocido con el Perfil PROMEP. Líneas de investigación: Gestión y política educativa, y Métodos cuantitativos.







# **CULTURA DE LA LEGALIDAD CIUDADANA**

**Análisis sobre el caso de Monterrey**



# rgumentos

Colección dirigida por

**Juan de Dios González Ibarra**

# **CULTURA DE LA LEGALIDAD CIUDADANA**

## **Análisis sobre el caso de Monterrey**

---

**Xóchitl A. Arango Morales**  
**Oswaldo Leyva Cordero**  
**Felipe Marañón Lazcano**  
**David F. Lozano Treviño**  
**(Coordinadores)**



Primera edición: febrero 2017

*Reservados todos los derechos conforme a la ley*

© Xóchitl A. Arango Morales, Oswaldo Leyva Cordero,  
Felipe Marañón Lazcano, David F. Lozano Treviño, *et al.*

© Distribuciones Fontamara, S. A.

Av. Hidalgo No. 47-b, Colonia Del Carmen

Deleg. Coyoacán, 04100, Ciudad de México.

Tels. 5659-7117 y 5659-7978 Fax 5658-4282

Email: [coedicion@fontamara.com.mx](mailto:coedicion@fontamara.com.mx)

[www.coedicion.com](http://www.coedicion.com)

[www.fontamara.com.mx](http://www.fontamara.com.mx)

ISBN Fontamara 978-607-736-386-6

ISBN UANL 978-607-27-0726-9

Impreso y hecho en México

*Printed and made in Mexico*

El presente libro es el resultado del trabajo colaborativo que se generó entre cuerpos académicos y grupos de investigación de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública y la Organización de la Sociedad Civil, Líderes Ciudadanos, representados por los siguientes ciudadanos:

Antonio Elosúa Muguerza, presidente de Líderes Ciudadanos

Carlos David Lugo Contreras, director de Líderes Ciudadanos

María Isabel Cruz Gutiérrez, administradora de Líderes Ciudadanos

También, gracias al apoyo del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE), ya que a través de éste se busca generar y difundir el conocimiento.

Los grupos de investigación que participaron fueron:

Cuerpos académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública (UANL):

- Administración Pública
- Ciencia Política
- Gestión y Política Educativa
- Desarrollo Sustentable
- Comunicación Política, Opinión Pública y Capital Social
- Agradecemos la participación del Cuerpo Académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla: Estudios de Política y Procesos de Gobierno

La Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, y la Subdirección de Investigación agradece a los becarios, estudiantes en estancia de investigación, estudiantes en verano científico, así como estudiantes del servicio social por el apoyo prestado a la presente investigación, dicho equipo se menciona alfabéticamente a continuación.

Daniel Guajardo Cavazos

Daniela Montalvo Herrera

Gerardo Mendoza Casas

José Rodolfo Barrientos Urbina

Lorena Gurrola Pérez

Luis Nahúm Paz López

Mónica A. Benavides Arellano

Raúl Parra Alemán

Ricardo Gutiérrez Felipe

Sofía Paz Morales





## INTRODUCCIÓN

La cultura de la legalidad es un conjunto de valores y acciones que genera en la ciudadanía la defensa de un Estado de derecho y el rechazo a la ilegalidad. Es a través de este mecanismo que la ciudadanía se autorregula, ya que son creencias compartidas regidas en forma democrática.

Por lo anterior, las propuestas de investigación que realizan las universidades en temas relacionados con el ámbito público, resultan una cuestión de gran preponderancia en materia de estudio para las Ciencias Sociales; en el caso particular del presente estudio, se buscó medir la percepción que los ciudadanos tienen en temas como desarrollo sustentable, servicio en la administración pública, educación, democracia, corrupción y comunicación política; dicho estudio constituye el pilar fundamental en la ruta de investigación para identificar el estatus que guarda el vínculo de la sociedad y las instituciones de gobierno, buscando con ello identificar primero y posteriormente generar propuestas de acción en favor de un desarrollo comunitario.

Es pertinente recordar que en los asuntos de la vida pública es imprescindible la observancia de la comunicación política y la administración gubernamental: esto conlleva la interacción con los ocho principales sectores de integración, de acuerdo con la asociación civil (AC) Líderes Ciudadanos: Empresas, Escuelas, Universidades, Familia, Jóvenes, Medios de Comunicación, Ciudadanía y Buen Gobierno, y Derecho y Leyes. Debe entenderse que en dicha interacción los cimientos que constituyen la piedra angular que soporta el camino a la legalidad están basados en la educación, que aporta herramientas que permiten evaluar las creencias, valores y prácticas sociales de la población más influenciada de la sociedad (alumnos) mediante el análisis de docentes, directivos y padres de familia de escuelas.

El trabajo en conjunto de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UANL y la AC Líderes Ciudadanos proporciona herramientas de aprendizaje que a la postre ayudarán en el proceso de mejorar la calidad de vida de los neoleoneses por medio de la contemplación e implementación de una cultura de legalidad en la que se llevan inmersos temas específicos de progreso sustancial, propuestas de acción y aplicación de dichas propuestas.

Para el estudio participó un grupo de investigadores de diferentes cuerpos académicos organizados por la Subdirección de Investigación de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UANL, ellos fueron: el cuerpo académico de Administración Pública, Ciencia Política, Gestión y Política Educativa, Desarrollo Sustentable y Comunicación Política, Opinión Pública y Capital Social.

Para la aplicación del cuestionario se contó con el apoyo de los integrantes de los cuerpos académicos, becarios de la maestría en Ciencias Políticas y estudiantes de nivel licenciatura; de igual manera, estos estudiantes participaron en la codificación de la base de datos para que posteriormente los investigadores integrantes de cada uno de los cuerpos académicos se encargaran del análisis de datos.

El instrumento fue integrado por diferentes ítems de temáticas diversas, cuestionario que ya había sido aplicado por otras instituciones, tal como se describe a continuación.

Para la variable *Conocimiento de la legalidad* se preguntó a los encuestados si consideraban que el conocimiento de la ley es una obligación ciudadana y qué tan importantes son los conocimientos de sus derechos; para esto se tomó la propuesta de la “Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas” (ENCUP, 2012).

La variable *Educación* se obtuvo del documento “Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México”, realizado entre el Instituto Federal Electoral y el Colegio de México en 2014, también se obtuvieron algunos ítems sobre valores del Programa de las Naciones Unidas (PNUMA) de 2004.

La variable *Administración pública* se obtuvo del informe de “Percepción de los Servicios Públicos de España”, aplicado por el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública de ese país.

Respecto a la variable *Desarrollo sustentable*, se utilizaron como referencia la escala de “Conducta Ecológica General de Kaiser” (1998) y la del “Nuevo Paradigma Ecológico de Dunlap” *et al.* (2000).

Es importante mencionar que en algunos ítems se realizaron cambios para adecuarlos a las necesidades del contexto del estudio.

La muestra aleatoria constó de 493 personas entrevistadas de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, hombres y mujeres mayores de 18 años, cuyas edades oscilaban alrededor de los 40 años, el salario promedio fue de entre cinco y seis salarios mínimos en promedio; respecto al género de los encuestados 43% fueron hombres y 57% mujeres; 46% de los entrevistados cuenta con estudios de licenciatura o está cursando la universidad y el estado civil se compone de 47% casados y 35% solteros.

El cuestionario se integra por cinco variables, las cuales reúnen 41 ítems, e inicia con datos sociológicos (edad, sexo, escolaridad, estado civil). Del conjunto de ítems presentados tres son abierto, 14 dicotómicos, diez de opción múltiple y 40 de escala Likert.





## **CULTURA DE LA LEGALIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

JUAN DE DIOS MARTÍNEZ VILLARREAL  
ÓSCAR OCHOA GONZÁLEZ  
PEDRO P. RIVERA HERNÁNDEZ  
JUAN MARTIN ALAMILLA SOSA

### **Resumen**

En las últimas décadas se ha percibido un notorio aumento de la violencia en nuestro país, ya sea individual o de la delincuencia organizada; sin embargo, fue a partir de la declaración de guerra por parte del ahora ex presidente Felipe Calderón al narcotráfico cuando se disparó la violencia a niveles insospechados. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), desde entonces México ha figurado en el ámbito internacional como uno de los países más violentos.

Con base en lo anterior, el presente estudio identifica al conocimiento de las leyes y al respeto a la legalidad y la transparencia como factores que integran la cultura de la legalidad, además de considerar a la corrupción como un factor que inhibe dicha cultura. Los objetivos de esta investigación son determinar el nivel de importancia que le dan los ciudadanos al conocimiento de la ley y sus derechos, al respeto de la legalidad y a la transparencia, además de observar su posición frente a la corrupción en México, en el estado y en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Por otra parte, los resultados más relevantes tienden a mostrar que los ciudadanos consideran que el conocimiento de la ley y sus derechos es muy importante; además, reportan que ellos en lo particular sí respetan la

ley, pero en cambio, consideran que las leyes no se respetan en México; en cuanto a la transparencia, manifiestan que en ninguno de los tres niveles de gobierno se toman las decisiones de manera transparente; finalmente, creen que los niveles de corrupción en el país, y en su municipio en lo particular, son muy altos.

Palabras clave: cultura de la legalidad, conocimiento legal, transparencia, corrupción.

## **Introducción**

En el México precolonial la conducta de sus habitantes estuvo regulada y salvaguardada por tradiciones y normas consuetudinarias, que permitían un orden en la comunidad; sin embargo, fue con la llegada de los españoles que se aplicaron los primeros ordenamientos constitucionales para normar la conducta de los habitantes de la colonia. En esta situación, los originarios de la Colonia tenían la calidad de súbditos de la corona española, pero no gozaban de los mismos derechos que los peninsulares.

Durante la época de la independencia de México se realizaron los primeros intentos de elaborar un ordenamiento jurídico acorde con la idiosincrasia de una naciente nación, que busca el control de su propio destino y que exprese «los sentimientos de la nación», como lo fue la Constitución de Apatzingán de 1814, que marcó el inicio hacia una institucionalización constitucional de México que culminó en la actual Constitución Política Mexicana (1917) (Tena, 2003: 76-78).

El proceso evolutivo constitucional de México ha sido muy convulso, caótico, inestable y complejo, así como por la lucha del poder político, lo que llevó a México al borde del anarquismo y, como consecuencia, a un Estado sin ley, en donde la ley del más fuerte predominaba. El desorden vivido dio lugar a la idea de que los proyectos políticos tenían que verse reflejados en un ordenamiento jurídico constitucional, que no dejara margen al desorden y a la ilegalidad.

México es un Estado de leyes desde su ámbito espacial federal, local y municipal, en donde la ley es la ministra que debe de guiar la conducta de los individuos que viven en sociedad; en este sentido, es en estas leyes donde reside la soberanía de un Estado democrático, ya que ni gobernantes ni gobernados están por encima de la ley (Serra, 2000: 533).

El ordenamiento jurídico que rige la vida social proyecta una cultura jurídica determinada que, a su vez, refleja el devenir de las diversas relaciones que se presentan en la sociedad, como son sus distintas tradiciones, cos-

tumbres, valores éticos, etcétera. Aunado a una cultura jurídica existe un elemento que fortalece o debilita la observación del orden jurídico de sus destinatarios. Esto se conoce como cultura de la legalidad (Salazar, 2006).

Se puede hablar de una cultura de la legalidad cuando los individuos que integran una colectividad o comunidad respetan los contenidos de un Estado de derecho y ajustan su conducta al orden jurídico constituido en razón de que les reconocen como legítimas.

Todo el marco jurídico en donde se establece la estructura, organización, regulación de las relaciones de los órganos del Estado entre sí y éstos con los individuos, así como el reconocimiento de los derechos humanos, serán letra muerta si no son llenados a la práctica por los individuos a quienes regulan.

Es importante el estudio de la cultura de la legalidad en los sistemas democráticos actuales, ya que nos permite evaluar el grado de observancia, respeto y apego al sistema de normas vigentes por parte de sus aplicadores y destinatarios.

Antes de determinar qué debemos entender por cultura de la legalidad, analizaremos por separado los términos de cultura y de legalidad.

#### A) La cultura

La palabra o término cultura tiene una gran diversidad de significados y múltiples acepciones.

La Real Academia de la Lengua Española (RAE) establece que el término cultura proviene del latín *cultura*, que significa cultivo, conjunto de modos de vida, costumbres y conocimiento que permite desarrollar un juicio crítico y un grado de desarrollo artístico, científico e industrial en una época o grupo social determinados.

Fue en las décadas de los Cuarenta y los Cincuenta cuando se dio un auge en el estudio de la ciencia social que indagaba el impacto de disciplinas como la sociología y la antropología en la política, en la economía y en las ciencias jurídicas, por lo que para 1963 la obra *The Civic Culture* de Almond y Verba, tendría un gran impacto en los estudios de las culturas (políticas) actuales (Salazar, 2006).

La palabra cultura alude a un amplio conjunto de conocimientos adquiridos sobre determinada disciplina del saber (sociología, psicología, derecho, antropología, medicina, etcétera). Se aplica también a las ideas, valores, creencias y tradiciones que forman parte de una comunidad o grupo social determinado.

Podemos considerar que cultura es el conjunto de valores, ideas, expresiones, tradiciones, usos, costumbres, convencionalismos sociales, creencias, prácticas, rituales, religión, reglas, normas, códigos y formas de ser que predominan en una sociedad, las cuales la identifican en el tiempo y en el espacio.

## B) Legalidad

La legalidad consiste en que toda acción o conducta que se realice esté dentro del marco de la ley, no obrar o actuar impulsado por preferencias, pasiones o caprichos que se encuentran fuera del marco jurídico constituido anticipadamente (Fraga, 2002: 101).

Por legalidad se entiende a aquellos sistemas de leyes que deben ser observados y que otorgan la facultad de realizar determinadas acciones, actos o circunstancias; sin embargo, también intervienen efectos como los que se llevan a cabo con terceros, como la moral, las buenas costumbres y las del propio Estado.

El marco jurídico es el conjunto de leyes elaboradas por una autoridad competente que debe ser respetado sin excepción por todos los que habitan o conviven dentro del espacio territorial de un estado (García, 2004: 53-61).

Todo precepto jurídico exige un deber o desaprueta determinadas acciones o conductas que atenten contra la justicia y contra el bien común de la comunidad; de esa forma limita las acciones y comportamientos de los individuos con la finalidad de ordenar y garantizar los derechos de todos.

Según Kelsen, el principio de legalidad establece: «Un individuo que no funciona como órgano del Estado puede hacer todo aquello que no está prohibido por el orden jurídico, en tanto que el Estado, esto es, el individuo que obra como Estado, solamente puede hacer lo que el orden jurídico le autoriza a realizar» (Tena, 2003: 11).

Legalidad es todo el orden jurídico de leyes y normas establecidas explícita e implícitamente en una sociedad para ordenar, organizar, dirigir las relaciones que se presentan en la vida cotidiana y reglamentar diferentes situaciones que se vayan presentando en la comunidad.

Según Gabino Fraga (2002), el principio de legalidad consiste en que ningún órgano o institución de Estado puede tomar decisiones que no sean de conformidad con una disposición general anteriormente

dictada, ya que todas sus actividades deben realizarse conforme a Derecho (Fraga, 2002: 99).

Por lo anteriormente analizado, podríamos hacer mención que la cultura de la legalidad es el conjunto de normas, leyes, reglas, tradiciones, valores y actitudes que se observan en una sociedad. La cultura de la legalidad es el nivel de cumplimiento que los integrantes de una sociedad tienen de las leyes.

## **Estado de derecho y cultura de la legalidad**

### ***El Estado de derecho***

El Estado de derecho o constitucional encuentra su génesis en la filosofía del Siglo de las luces o Ilustración, por lo tanto, regulaba la cultura de la ilustración, la razón y la libertad ilustradas, derivándose de esa manera el iusnaturalismo racionalista (legitimidad legal-racional). Es orden jurídico que todos y cada uno, personalmente o como organización e institución debemos saber, comprender y deliberar, para participar y decidir en la toma de decisiones (Díaz, 2002: 61).

El Estado de derecho salvaguarda y protege principios éticos basados en la libertad y la efectiva autonomía individual, exigencias políticas de carácter democrático y participativo, la creación jurídica de instituciones que garanticen los derechos fundamentales del hombre (Díaz 2002: 62); en este sentido, un Estado de derecho es aquél en donde impera la ley, en donde tanto gobernantes como gobernados están sujetos a la ley, y ninguno de ellos está por encima de ella.

Para Raz (2002), el estado derecho significa que la gente debe de acatar y regirse por el derecho; de igual forma, todo acto gubernamental debe tener su fundamento en el derecho; es decir, que tiene que ser autorizado por el mismo derecho. Todo acto de autoridad que no esté permitido por el derecho no puede ser considerado acción de un gobierno por vulnerar el principio de legitimidad (Raz, 2002: 17).

Raz (2002) señala algunos fundamentos o principios del Estado de derecho como: todas las disposiciones jurídicas deben ser prospectivas, abiertas y claras, además de relativamente estables; el establecimiento de disposiciones jurídicas particulares debe ser guiado por disposiciones jurídicas abiertas, estables, claras y generales, la independencia del Poder Judicial tiene que estar garantizada, los principios de la justicia natural tienen que ser



observados, los tribunales deben tener poderes de revisión sobre la implantación de los otros principios, los tribunales deben ser fácilmente accesibles y a los órganos de prevención criminal dotados de discrecionalidad no se les debe permitir pervertir el derecho, el Estado es el ente que tiene la potestad de elaborar las normas jurídicas a través de los órganos y procedimiento previamente establecidos en su carta magna. El Estado no sólo crea las normas jurídicas, sino que se sujeta de manera voluntaria a los preceptos que él mismo ha instituido. El derecho es el instrumento por medio del cual el Estado logra su finalidad, que es el bien común y mantener un orden social, esto es lo que se conoce como Estado de derecho (García, 2004: 52-60, 103).

Un Estado de derecho que utilice la ley para aumentar su autoridad en una forma desmedida, que establezca aparatos burocráticos represivos, que imponga límites políticos-represivos a su sociedad, así como la adopción de decisiones secretas, lo van aislando cada día más de la fuente legitimación, que es la sociedad (Rico 1999: 55).

Una vez analizados los términos de cultura y legalidad, es posible abordar con una mayor propiedad lo que se debe de entender por cultura de la legalidad. Al vincular ambos términos nos podemos dar cuenta de que el término de legalidad se encuentra contenido en la cultura, que es un término más amplio; por lo anterior se puede indicar que la cultura es el ámbito en donde se desarrollan las acciones o conductas de los miembros de una sociedad, además de cultivarse el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las tradiciones o del orden legal.

De acuerdo con Salazar (2006), la cultura de la legalidad de una sociedad determinada es el conjunto de conocimientos, creencias, usos, costumbres, símbolos, convencionalismos sociales, ideas, valores, etcétera, de los miembros que integran una comunidad, en relación con los aspectos de la vida colectiva que tienen que ver con la observancia de las normas jurídicas. A su vez, Laveaga (1999) menciona que la «cultura de la legalidad significa, sí, imperio de la ley; pero también significa obediencia de la ley, y la obediencia requiere, necesariamente, conocimiento de la ley».

Como se indica en el párrafo anterior, la cultura de la legalidad no sólo tiene que ver con acatar las normas jurídicas, sino también cumplir con todo aquello que implica una regla o una norma que regula nuestro comportamiento individual o colectivo en nuestra relación con los demás integrantes de la comunidad a la que pertenecemos, lo cual permite llevar una vida armoniosa en la comunidad.

La cultura de la legalidad debe de aflorar en todos los destinatarios del orden jurídico, ya sea como individuo que ejerce un cargo público que realiza

acciones de gobierno, así como el ciudadano de a pie, que respete a la ley; sin embargo, cuando esto no sucede impera la subcultura de la ilegalidad.

Rodríguez y Mora (2008) indican en su estudio relacionado con los derechos humanos, que en México es muy común señalar la complicidad que existe entre quien viola la ley y las autoridades, lo que ha originado la desconfianza de la sociedad hacia las autoridades e instituciones del Estado, dando lugar al aumento de los niveles de la delincuencia, transgrediendo algunos fundamentos del Estado de derecho (Rodríguez y Mora, 2008: 63).

La práctica de la corrupción entre los ciudadanos se da en todos los sectores de la sociedad mexicana: la mordida, el soborno, la extorsión, el moche y el de cómo nos arreglamos, son males en los que se encuentran involucrados: funcionarios y ciudadanos de todos los niveles y en todo lugar. La corrupción, considerada una maquinaria institucional desde hace muchos años, es un cáncer que consume a la sociedad y que es muy difícil erradicar (Salazar, 2006: 43).

Lo que atenta contra una cultura de la legalidad, además de la corrupción, es la desconfianza en las autoridades, la complicidad entre autoridades y criminales; es la impunidad, el abuso policiaco, la irritación y el malestar social, la inseguridad, la pérdida de un sinnúmero de vidas por el crimen organizado, los ataques a la dignidad humana, la negligencia e indiferencia de las autoridades para satisfacer las necesidades más apremiantes de la sociedad, sobre todo la de los grupos vulnerables (Rodríguez *et al.*, 2008: 63-68).

Orlando (2003), en su obra *Hacia una cultura de la legalidad. La experiencia siciliana*, señala cómo el crimen organizado (la mafia siciliana) sometió a la ciudad a un ambiente de terror, miedo, inseguridad, incertidumbre, asesinatos, violaciones, secuestros, drogas, etcétera. Y cómo este grupo delictivo ha desarrollado o extendido sus tentáculos en la cultura (del narco), en la política e incluso en el clero, porque el Estado estaba atrofiado y plagado de defectos. La gente, en lugar de acudir a instituciones judiciales a solicitar justicia, acudía a estas personas (mafiosos) *uomini di rispetto*, para que realizaran las funciones que debería de realizar un gobierno burocrático (Orlando, 2003: 16-19).

Máximo Carvajal señala cómo la ineficiencia de las autoridades, sobre todo aquellas encargadas de la investigación de los delitos y de las autoridades de administración de justicia, así como la corrupción, el juego de intereses y las presiones políticas, han llevado a ciertas comunidades a aplicar la justicia por su cuenta al margen de la ley, dejando a un lado a las instituciones del Estado (Rodríguez *et al.*, 2008).

Un Estado de derecho que cultiva una cultura de la legalidad tiene como fin regular, orientar, limitar y encauzar las acciones de los miembros de una sociedad determinada. Establece previamente las reglas del juego con total transparencia, evitando enérgicamente —sin caer en la represión— las acciones anarquistas y conductas discrecionales por parte de los individuos que atentan contra el orden social, político y jurídico (Salazar, 2006).

De acuerdo con Godson (2000), para crear, fomentar y mantener la cultura de la legalidad, las instituciones desempeñan un papel indispensable, por lo que se requiere que los sectores educativos, los centros de autoridad moral (religiones e instituciones culturales), los medios de comunicación y las corporaciones policiacas generen acciones loables entre lo que dicen y lo que hacen. En este sentido, él propone que las actividades de estos cuatro sectores trabajen en la conformación y sostenibilidad de la cultura de la legalidad, a las cuales vale la pena mencionar:

- Sector educativo: forjar conocimientos y destrezas mediante un plan de estudios de cultura de la legalidad, institucionalizado y permanente.
- Centros de autoridad moral: crear conciencia y establecerla en su enseñanza.
- Medios de comunicación: fomentar la esperanza al hacer públicos los esfuerzos efectivos tanto del gobierno como de la ciudadanía.
- Corporaciones policiacas: poner el ejemplo de que el Estado de derecho sí importa y de que la corrupción no será recompensada. La cultura de la legalidad forma parte del programa de formación.

## **Preguntas de investigación**

Con base en la literatura revisada se plantean las siguientes preguntas de investigación:

PI1: ¿Cuál es el nivel de importancia que le dan los ciudadanos al conocimiento de la ley y sus derechos en Monterrey, Nuevo León?

PI2: ¿Cuál es el nivel de relevancia que le dan los ciudadanos al respeto de la legalidad y a la transparencia en los diferentes niveles de gobierno?

PI3: ¿Cuál es la posición de los ciudadanos de Monterrey frente a la corrupción en México y en su municipio en lo particular?

## Método

La presente investigación, cuyo enfoque es cuantitativo, tuvo como contexto el municipio de Monterrey y como población de estudio una muestra de 424 ciudadanos. En relación con su perfil, se puede indicar que 56.6% son mujeres y 43.4% son hombres; por otra parte, 33.1% son jóvenes de 18 a 29 años, 64.9% son adultos de 30 a 65 años y 2% adultos mayores de 65 años; a su vez, 72.3% reporta tener un ingreso mayor al promedio de la población nacional que es de \$5,412 mensual (tercer trimestre de 2015) de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; en lo que corresponde al nivel educativo, 24.4% indica haber terminado la preparatoria o técnica; asimismo, 46.9% de los entrevistados manifiesta ser profesionista; por otra parte, 84% votó en las elecciones para gobernador en el año 2015.

## Cuestionario

En la creación del cuestionario se tomaron en consideración escalas presentadas por la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP); es importante mencionar que en algunas escalas se realizaron cambios para adecuarlas a las necesidades del estudio.

## Variables

En la creación de la variable «conocimiento de la legalidad» se preguntó a los encuestados si consideraban que el conocimiento de la ley es una obligación ciudadana y qué tan importantes son los conocimientos de sus derechos; para lo cual se tomó la propuesta de la ENCUP (2012) con una escala de Likert donde (1) es nada y (5) es mucho; en el análisis de fiabilidad se alcanzó un Alfa de Cronbach ( $\alpha$ ) de .782; lo anterior le da fiabilidad a los ítems que conformaron la variable.

Para la construcción de la variable «legalidad y transparencia» se preguntó a los ciudadanos qué tanto respetaban la ley, que si consideraban que las leyes se respetaban en México y qué tan transparentes consideraban que eran las decisiones de los diferentes niveles de gobierno; para lo cual se consideró la ENCUP (2012) con una escala Likert, donde (1) es nada y (5) es mucho; en el análisis de fiabilidad se alcanzó un Alfa de Cronbach ( $\alpha$ ) de .703, este resultado le da fiabilidad a los ítems que conformaron la variable.

En la creación del constructo «corrupción» se consideró como referencia la ENCUP (2012) operando una escala de Likert de 5 puntos donde (1) es nada y (5) es mucho, preguntando a los encuestados sobre los niveles de corrupción en el país y en el municipio de Monterrey en lo particular; en el análisis de fiabilidad se obtuvo un Alfa de Cronbach ( $\alpha$ ) de .862, este resultado da fiabilidad a los ítems.

## Análisis de resultados

En lo que corresponde al conocimiento de la legalidad ( $M=4.30$ ,  $DE=.898$ ), en general (variable) es alta, ya que se encuentra por encima de la media promedio; en lo particular los entrevistados creen que el conocimiento de la ley es una obligación ciudadana ( $M=4.30$ ,  $DE=1.02$ ), en este sentido, 83.1% de los ciudadanos considera que el conocimiento de la ley es una obligación (algo – mucho), a diferencia de 7.6% que no lo considera como una obligación (nada – muy poco); por otra parte, los ciudadanos estiman que es importante el conocimiento de sus derechos ( $M=4.32$ ,  $DE=.959$ ), en este particular, 81.1% de los ciudadanos estima que el conocimiento de sus derechos es relevante (algo – mucho), por otra parte, 5.3% no lo consideran importante (nada – muy poco). Lo anterior se expresa en la Tabla 1.

TABLA 1. *Conocimiento de la legalidad*

Ítems	Media	Desviación estándar	(algo – mucho)	(nada – muy poco)
El conocimiento de la ley es una obligación ciudadana	4.30	1.02	83.1%	7.6%
El conocimiento de sus derechos es importante	4.32	.959	81.1%	5.3%
Conocimiento de la legalidad (variable)	4.30	.898		

FUENTE: Elaboración propia.

La legalidad y la transparencia ( $M=2.83$ ,  $DE=.703$ ) como constructo es baja, por debajo de la media aritmética; la postura más positiva la externan los ciudadanos al considerar que ellos sí respetan la ley ( $M=4.12$ ,  $DE=.986$ ), ya que 82.64% indica su respeto a la ley (algo – mucho), en contraste con 7.9% que manifiesta prácticamente no respetarla (nada – muy poco); estos resultados se contraponen al preguntar si ellos consideran que en México se respetan las leyes ( $M=2.70$ ,  $DE= 1.00$ ), ya que 21.2% manifiesta que en

nuestro país no se respeta la ley (algo – mucho); en contraparte 46.7% indica que en México usualmente no se respeta la ley (nada – muy poco).

En relación con la opinión de los encuestados en materia de transparencia en las decisiones de los diferentes niveles de gobierno es baja, en este sentido, en lo que corresponde al gobierno federal ( $M=2.48$ ,  $DE= 1.05$ ) 17.5% (algo – mucho) indica que son transparentes y 52.3% (nada – muy poco) indica que no son transparentes; asimismo, en el gobierno estatal ( $M=2.46$ ,  $DE= 1.08$ ) 16.6% (algo – mucho) cree que son transparentes y el 52.3% (nada – muy poco) que no lo son; además en relación con las decisiones que toma el gobierno municipal ( $M=2.48$ ,  $DE= 1.05$ ) 15.9% (algo – mucho) consideran que son transparentes y 53% (nada – muy poco) piensa que no lo son. Lo anterior se expresa en la Tabla 2.

TABLA 2. *Legalidad y transparencia*

Ítems	Media	Desviación estándar	(algo – mucho)	(nada – muy poco)
Respetu usted la ley.	4.12	.986	82.6%	7.9%
Se respetan las leyes en México.	2.70	1.00	21.2%	46.7%
Son transparentes las decisiones del gobierno federal.	2.48	1.05	17.5%	52.3%
Son transparentes las decisiones del gobierno estatal.	2.46	1.08	16.6%	52.3%
Son transparentes las decisiones del gobierno municipal.	2.41	1.06	15.9	53%
Legalidad y transparencia.				

FUENTE: Elaboración propia.

A su vez, la percepción de corrupción en el país y en el municipio de Monterrey en lo particular es alta ( $M=4.24$ ,  $DE= 1.03$ ); presentando los niveles más elevados en lo que corresponde al país ( $M=4.31$ ,  $DE= 1.11$ ), donde 80.2% (algo – mucho) considera que los niveles de corrupción son altos, a diferencia de 9.5% (nada – muy poco) que cree que son bajos; en el mismo sentido, la percepción de corrupción municipal también es alta ( $M=4.24$ ,  $DE= 1.03$ ), 75.6% (algo – mucho) de los entrevistados así lo percibe y sólo 9% (nada – muy poco) considera que prácticamente no se da. Los resultados descriptivos de las variables se presentan en la Tabla 3.

Tabla 3. *Percepción de la corrupción*

Ítems	Media	Desviación estándar	(algo – mucho)	(nada – muy poco)
Corrupción en el país.	4.31	1.11	80.2%	9.5%
Corrupción en el municipio.	4.19	1.03	75.6%	9%
Percepción de la corrupción.	4.24	1.03		

FUENTE: Elaboración propia.

## Discusión y resultados

Para responder a la primera cuestión sobre cuál es el nivel de importancia que le dan los ciudadanos al conocimiento de la ley y sus derechos en Monterrey, se puede indicar que los participantes en el estudio reportan que es muy importante; en este sentido, se podría afirmar que el conocimiento de la ley es un elemento relevante dentro de la cultura de la legalidad.

En relación con la segunda pregunta, que cuestiona cuál es el nivel de relevancia que le dan los ciudadanos al respeto de la legalidad y a la transparencia, se puede decir que en lo particular ellos consideran que respetan la ley, pero al ser cuestionados en general si ellos creen que en México se respeta la ley, su respuesta es negativa; es decir, los ciudadanos le dan prioridad a la legalidad, concepto que Fraga (2002) define como toda acción o conducta que se lleve a cabo dentro del marco de la ley, pero a su vez consideran que en México prácticamente no existe una cultura de la legalidad.

En cuanto a la transparencia, los ciudadanos reportan que las decisiones que se toman en los tres niveles de gobierno no son usualmente claras; en este sentido, no actúan conforme a la legalidad. De acuerdo con Fraga (2002), el principio de legalidad radica en que ningún órgano del Estado debe tomar decisiones que no estén de acuerdo con el orden legal vigente; es decir, las instituciones del Estado deben de actuar conforme a derecho, por lo tanto, sus decisiones deben de ser transparentes como lo indica la «Ley General de Transparencia y Acceso a la Información», en cuya fracción VII se plantea como objetivo «promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas».

Por otra parte, en la tercera pregunta donde se cuestiona la postura de los ciudadanos frente a la corrupción en México y en su municipio en lo

particular, se indica que la percepción de corrupción en ambos casos es muy alta; en este sentido se puede indicar que la práctica de la corrupción se presenta en todos los sectores de la sociedad mexicana; es decir, se podría considerar a la corrupción como una enfermedad que a través del tiempo consume a la sociedad mexicana. En México es común escuchar refranes muy populares como «un político pobre es un pobre político», «el que no transa no avanza», «la política es para enriquecerse», «no hay peor error que vivir fuera del presupuesto», «no hay general que resista un cañonazo de cincuenta mil pesos», «éste es el año de Hidalgo, no hay que dejar algo», «más vale bolsa saca que bolsa seca», etcétera, que han distorsionado las relaciones de los gobernados con sus gobernantes y denota en cierto grado una falta de cultura de la legalidad (Salazar, 2006: 42).

En México, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, para fomentar la cultura de la legalidad y combatir la corrupción, ha realizado acciones importantes para combatir esta última en las instituciones del gobierno federal, como la promulgación de la Ley general del sistema nacional anticorrupción, así como la creación de la Secretaría de la Función Pública, encargada de impulsar la cultura de la legalidad en toda la administración pública federal, además de intervenir en el análisis, diseño y propuesta de regulación jurídica, con el objeto de consolidar el bien común y dar sustento al cumplimiento de la ley por parte de los servidores públicos (Gudiño, 2009).

En Nuevo León, el gobernador independiente Jaime Rodríguez Calderón creó la Fiscalía Anticorrupción con la finalidad de combatir la corrupción en la esfera de la administración pública estatal, cumpliendo su promesa de campaña electoral de llevar a la cárcel a todo funcionario o empleado público corrupto.

Cualquier esfuerzo que realicen las autoridades en los tres niveles de gobierno contra la subcultura de la ilegalidad, tarde o temprano rendirá frutos en beneficio de la comunidad en general.

### **Fuentes consultadas**

DÍAZ, L. (2002), “Estado de derecho y legitimidad democrática”, en Carbonell, M, Orozco, W y Vázquez, R. (coords.), *Estado de derecho: concepto, fundamentos y democratización en América Latina*, Siglo XXI, Editores, México.

ENCUP (2008), Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas ciudadanas, Secretaría de Gobernación, México.



- FRAGA, G. (2002), *Derecho administrativo*, Porrúa, México.
- GARCÍA E. (2004), *Introducción al estudio del derecho*, Porrúa, México.
- GUDIÑO, J. (2009), “Consideraciones sobre la relevancia de la Secretaría de la Función Pública en la construcción de seguridad pública y procuración de justicia penal a nivel federal”, en *El Cotidiano*.
- GODSON, R. (2000), “Guía para desarrollar una cultura de la legalidad”, tomado de <[http://www.anticorruptcion.gob.mx/web/doctos/integridad/curso-cultura/guia\\_para\\_construir\\_una\\_cl.pdf](http://www.anticorruptcion.gob.mx/web/doctos/integridad/curso-cultura/guia_para_construir_una_cl.pdf)>.
- LAVEAGA, G. (1999), *La cultura de la legalidad*, tomado de <<http://www2.scjn.gob.mx/Ministros/oscgv/Public/CULTURA%20DE%20LA%20LEGALIDAD.pdf>>.
- LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.
- ORLANDO, L. (2003), *Hacia una cultura de la legalidad. La experiencia siciliana*, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- RAZ, J. (2002), “El Estado de derecho y su virtud”, en Carbonell, M, Orozco, W y Vázquez, R. (coords.), *Estado de Derecho: concepto, fundamentos y democratización en América Latina*, Siglo XXI Editores, México.
- RICO, A. (1999), “Del Estado de derecho al Estado policía, Uruguay 1967-1973”, en Demasi, G, Pérez, A, Schneider, H, y Sontheimer, *Estudio de derecho y estado de excepción, Alemania y Uruguay: las décadas violentas*, Trilce, Montevideo.
- RODRÍGUEZ, R, y Mora, J. (2008), “Derechos humanos y linchamientos en México”, en *El Cotidiano*, (150), 63-68.
- SALAZAR, P. (2006), *Democracia y cultura de la legalidad*, IFE, México.
- SERRA, A. (2000), *Ciencia política. La proyección actual de la teoría general del Estado*, Porrúa, México.
- TENA, F. (2003), *Derecho constitucional mexicano*, Porrúa, México.

## ÍNDICE

Introducción.....	9
Cultura de la legalidad y participación ciudadana .....	13
Resumen .....	13
Introducción.....	14
Estado de derecho y cultura de la legalidad.....	17
Preguntas de investigación.....	20
Método .....	21
Cuestionario.....	21
Variables.....	21
Análisis de resultados .....	22
Discusión y resultados .....	24
Fuentes Consultadas .....	25
Los hábitos de consumo de medios y su influencia en la Confianza Institucional .....	27
Introducción.....	27
El proceso del cultivo de imágenes a través de los medios.....	28
Consumo de medios y Confianza Institucional .....	30
Metodología.....	32
Análisis de resultados .....	33
Conclusiones .....	36
Fuentes consultadas .....	38
Cultura Sustentable de la ciudadanía de Monterrey .....	41
Introducción.....	41
Cuestionario de Cultura Ambiental y/o Cultura de la Legalidad Ambiental.....	42
Escala de Conducta Ecológica General de Kaiser.....	42

Escala del Nuevo Paradigma Ecológico.....	43
Diseño de investigación .....	44
Objetivo general .....	45
Procedimiento .....	45
Instrumento .....	45
La validación de escala .....	46
Resultados .....	46
Conclusiones .....	52
Propuesta.....	53
Fuentes consultadas .....	54
Percepción ciudadana de los servicios municipales	
de la ciudad de Monterrey .....	55
Introducción.....	55
La eficiencia y la eficacia en las administraciones públicas.....	55
Diseño metodológico.....	59
Análisis de resultados .....	60
Conclusiones .....	63
Fuentes consultadas .....	64
Valoración de la ciudadanía en el municipio de	
Monterrey a partir de su desarrollo educativo .....	65
Introducción.....	65
Objetivo.....	66
Pregunta de investigación.....	67
Una aproximación al concepto de ciudadanía .....	67
Metodología.....	71
Análisis de resultados .....	71
Conclusiones .....	76
Fuentes consultadas .....	77



*Esta obra se imprimió bajo el cuidado de Ediciones Coyoacán, S. A. de C. V.,  
Av. Hidalgo No. 47-B, Colonia Del Carmen, Deleg. Coyoacán, 04100,  
México D. F., en febrero de 2017  
El tiraje fue de 1000 ejemplares más sobrantes para reposición.*